

Sección latinoamericana

BRASIL

La amazonia y otras riquezas

La vasta e ignota región amazónica es materia de estudio inagotable como su apretada selva. También es objeto de pugnas y debates, pues varios ecologistas temen que, al igual que en el resto del mundo, la contaminación invada el agua, el suelo y el aire de la comarca casi virgen, rara en la Tierra. Así, por ejemplo, en 1971 el ingeniero Glycon de Paiva declaró que se debería elegir entre preservar "la mayor fábrica de oxígeno y de lluvia de Sudamérica" o "producir proteínas mediante la explotación agropastoral". A su llamado se añadieron las opiniones de los que advertían que, al explotar la selva, desaparecería uno de los "pulmones verdes" del planeta. Empero, otros consideran tales argumentos como simples fantasías. Según el director del Instituto de Investigaciones y Experimentaciones Agrícolas del Norte, Claudio Falesi, "la selva no puede ser una reserva de oxígeno puesto que consume lo que produce, es decir, vive en circuito cerrado". A dicha opinión se suma la del profesor Wisniewski, quien plantea: "¿Cómo podría ser la Amazonia un pul-

món del mundo, cuando 70% del anhídrido carbónico del globo es digerido por los mares?"¹

Aunque se piensa proteger a la selva de la invasión ganadera utilizando los espacios abiertos de la región, los ecologistas advierten otra amenaza aún en germen: la tala de los bosques, todavía incipiente. Los recursos forestales amazónicos no se han explotado de manera intensiva y en muchas partes se han conservado casi intactos gracias a las dificultades para llegar al corazón de la selva. A lo largo del río Jari, situado al norte de Pará, se está creando lo que será la mayor plantación forestal del mundo: 90 millones de árboles de rápido crecimiento para producir celulosa. Se trata de un proyecto del millonario estadounidense Daniel Ludwig. La Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) estima que Brasil tendrá, dentro de 15 años, la mayor reserva de madera del mundo y estará en condiciones de dominar el mercado de especies tropicales. En su actual estado, la Amazonia representa un potencial impresionante: 67 000 millones de m³ de madera, la tercera parte de los cuales tiene valor comercial.

Cuando el Gobierno inició en 1969 el primer programa de colonización agrícola en la Amazonia, se proponía crear una nueva civilización en el centro de la selva,

formar un nuevo tipo de hombre: el amazoniano. De Altamira a Itaituba, a lo largo de 500 km de la carretera Transamazónica, la selva se ha humanizado con maíz, arroz, naranjos y platanos. Los primeros colonos, propietarios de un lote de 100 ha. por familia, de una casa y de algunas herramientas compradas a crédito, han levantado dos o tres cosechas, pero no son en manera alguna hombres nuevos, dice Vanhecke.² Cuando mucho serán campesinos satisfechos, añade, ya que antes "pasaban hambre" en las malezas nordestinas o bien estaban marginados por la mecanización agrícola y las grandes propiedades meridionales. Aquí, al menos, "defienden su pan".

Los colonos de la Amazonia provienen de lugares remotos y si bien muchas de las tierras que el Gobierno les ha otorgado son buenas, por ejemplo, las cercanas a Altamira, carecen de conocimientos y recursos para explotarlas adecuadamente. Se trabaja de manera tradicional por medio de la quema. No se emplean arados ni fertilizantes, sólo picos; tampoco se corrige la acidez de los suelos. Los críticos de la colonización opinan que el rendimiento en conjunto ha sido inferior a los gastos, mismos que ascienden a 100 000 *cruzeiros* por familia. La SUDAM reconoce el fracaso del esquema colonizador: se pretendía transferir los excedentes de mano de obra del nordeste hacia los excedentes de espacio de la Amazonia; sólo se logró traspasar

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del *Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.*, sino en los casos en que así se manifieste.

1. Véase "Brasil: la conquista de la Amazonia", en *Comercio Exterior*, México, abril de 1976, pp. 439-441.

2. Véase Charles Vanhecke, "L'Amazonie en train de naître", en *Le Monde*, París, 9, 10 y 11 de marzo de 1976.

los problemas de una a otra zona, fomentar la explotación depredadora de los suelos y el mantenimiento de una agricultura de subsistencia que no produce excedentes comercializables. Según los planes iniciales se intentaba establecer a 100 000 familias; sólo se ha logrado instalar a 6 000. No ha surgido el "hombre nuevo" y aunque se está poblando una región no han desaparecido las tensiones sociales en las regiones de emigración y, en cambio, se generan nuevas en las zonas de inmigración. Por tanto, el Gobierno vuelve la vista hacia los grandes empresarios. Ahora se intenta "capitalizar" la selva, atraer a empresarios del tipo de Daniel Ludwig y de los grandes hacendados.

La SUDAM opina que, dadas las condiciones amazónicas, "no se justifica promover la colonización con lotes de 100 ha. En la Amazonia, menos de 3 000 ha. no significan nada". El campesino aislado —dicen ciertos especialistas— practica un cultivo de ciclo corto que deja los suelos sin protección y los agota. En cambio, "los grandes hacendados se dedican a cultivos permanentes: café, cacao, pimienta, palma de aceite y hevea, los cuales protegen la tierra de la erosión pluvial". Ahora se está en favor de la agricultura extensiva, más que de la intensiva.

Se afirma "la vocación capitalista de la Amazonia". Donde hacen falta los hombres, son precisas las empresas, se dice. Por tanto, el Gobierno es proclive al financiamiento de los grandes negocios, como lo es la explotación de la hevea, para lo cual proporciona una ayuda crediticia completa, con una tasa de interés de 7%, pagadera cuando los árboles estén en producción. Esta generosidad es comprensible, ya que Brasil importa 66.6% del caucho natural que consume y teme a la inestabilidad de las exportaciones de los principales productores del sudeste asiático.

Por otra parte, el alza de los precios del petróleo y del caucho sintético ha convencido a los brasileños de la necesidad de impulsar la industria del látex. Una hectárea plantada por el hombre contiene 400 árboles que rinden tonelada y media del producto. En cambio, en la selva se encuentran sólo de 4 a 5 árboles por ha. Con las 5 000 ha. ya financiadas por el Gobierno es posible obtener, en diez años, lo que en la actualidad se cosecha, de manera anár-

quica, en 15 millones de hectáreas. Ya se han plantado 18 000 ha. y se prevé plantar otras 50 000 en los próximos cuatro años. Con ello Brasil producirá todo el caucho necesario para su consumo, sin mermar de manera importante las riquezas de la selva. Mediante la siembra de cafetos, cacao, árboles de látex y pimenteros, explica Wisniewski, se intenta sustituir una selva polimorfa, de escasa rentabilidad, con un bosque homogéneo, de alto rendimiento.

Por todas partes, mediante inversiones masivas y creando espacios, se modifica el futuro de la Amazonia. Una empresa explotadora de manganeso en Amapá intenta, al parecer, dedicarse a la caña de azúcar. Para ello, las 100 000 ha. que abarca el proyecto ("no compramos terreno, sino espacio") deberán ser transformadas. Será necesario "construir la tierra", rompiendo la capa de laterita mediante la permeabilización de los suelos y corrigiendo su acidez con 400 000 ton. de cal. "Con sol y lluvias en abundancia y el bajo precio del terreno, la Amazonia puede revolucionar el mercado mundial de la caña de azúcar."

Por otro lado, en buena parte del país, desde las lluviosas selvas amazónicas hasta el noreste, y luego hasta las colinas del sur, enormes máquinas dejan al descubierto ricos yacimientos de minerales, escribe un analista en un diario neoyorquino.³ Los tesoros de bauxita, cobre, níquel, hierro y otros muchos metales atraen a las más poderosas empresas del mundo industrializado. Aunque aún Brasil es importador neto de varios productos estratégicos y materias primas, dentro de unos años puede convertirse en gran exportador de los mismos. En los medios enterados se afirma que los bancos extranjeros —privados y estatales— son la fuente más importante de los 1 000 millones de dólares mensuales invertidos en empresas mineras desde principios de 1974. Cada mes se invierten otros 1 000 millones de dólares en el financiamiento de plantas transformadoras de minerales, en ferrocarriles, carreteras e instalaciones portuarias. En 1975 se gastaron 150 millones de dólares sólo en la exploración de nuevos depósitos y el ferrocarril que correrá a lo largo de casi 900 km desde el centro minero de

3. H.J. Maindenberg, "Brazil's Underground Riches", en *The New York Times*, 29 de febrero de 1976.

Belo Horizonte hasta las siderúrgicas cercanas a Sao Paulo costará 2 500 millones de dólares.

Aunque se ignora a cuánto asciende la inversión en el sector minero en su totalidad, se sabe que los préstamos solicitados por Brasil han contribuido en forma decisiva a aumentar su deuda externa. Generalmente el Banco Mundial proporciona las cantidades necesarias para iniciar los proyectos. Otras entidades públicas internacionales contribuyen con préstamos para gastos en carreteras, importación de equipo y otras instalaciones.

De acuerdo con los técnicos extranjeros especializados en minería y con los banqueros brasileños, el Gobierno da prioridad a la industria de los metales como medio para desarrollar la economía del país. Un financiero afirma que la Fiat de Italia no podría construir una planta productora de 200 000 autos al año en Belo Horizonte si no tuviera garantizado el acero y los otros metales necesarios.

En el consorcio minero que hace operaciones en Brasil figuran renombradas empresas transnacionales: British Steel, United States Steel, Bethlehem, Reynolds, Hanna, Kaiser, Mitsubishi, Marubeni, Thyssen, Hoesch, Krupp y Alcan, para citar a unas cuantas, según afirma Maidenberg, a quien se ha venido siguiendo en esta nota. De Europa oriental han acudido empresas de Polonia y Rumania para intercambiar tecnología y equipo para la minería por contratos de suministro de minerales a largo plazo.

El centro minero más importante de todo el país continúa siendo el de Minas Gerais (Minas Generales), nombre que data de la colonización portuguesa. Sin embargo, continuamente se descubren yacimientos en otras partes y la Amazonia oculta veneros incalculables aún. Así, en la región de Itaituba se explotan 63 *garimpos* (centros de extracción de oro) utilizando métodos tan rudimentarios y anticuados como los de los gambusinos del Klondike, en Canadá, en el siglo pasado: se lava la tierra, pasándola por un tamiz, hasta que se separa el metal precioso. Al terminar la jornada se entrega al jefe de cada *garimpo* el oro recogido. Los gambusinos, llamados *garimpeiros*, viven tal mal como los *seringueiros*. De sus salarios se reducen las deudas que, casi siempre, superan a lo que

Colombia: peligro de golpe militar

JUAN LUIS HERNANDEZ

Vil, vil es esclavitud. Favorable civiles el Salvador. Estas palabras deben ser la respuesta de los creyentes a los uniformados que se autoproclaman protectores de la libertad y defensores del cristianismo. Dios afirma el libre albedrío del hombre y aceptar que modernos pretorianos traten de suprimirlo degrada. Este exordio viene a cuento porque la plaga del militarismo, que ha invadido a numerosos países latinoamericanos, amenaza con extenderse a Colombia.

La asombrosa proporción (77%) de abstenciones en el acto electoral de abril de 1976, pone de manifiesto un hecho de la mayor importancia. La gran masa de los ciudadanos no se siente representada por los partidos que constantemente han acaparado el poder, Liberal y Conservador, los cuales eficazmente impiden otra opción al pueblo colombiano. De ahí que muchos consideren inútil recurrir al voto y busquen otros métodos de lucha más directos: manifestaciones, huelgas, ocupación de tierras y guerrillas.

Un vistazo retrospectivo a la historia del país nos permitirá exponer a la luz del día la ceguera y egoísmo de las oligarquías tradicionales, causa de la debilidad actual de los partidos que las representan y del peligro de golpe militar.

Colombia es una nación potencialmente muy rica, con recursos más que suficientes para asegurar a sus 25 000 000 de habitantes una vida decorosa. La pobreza, la mala salud, el analfabetismo de amplios sectores de la población y la pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso constituyen una acusación permanente contra la clase social dominante, preocupada sobre todo por enriquecerse.

Su territorio de 1 138 914 km² de superficie contiene grandes extensiones de tierra fértil bajo muy variados climas, que permitirán una producción más abundante y diversificada de alimentos, así como inmensos pastizales para una próspera ganadería. En sus costas, además, abunda la pesca, casi inexplotada. El subsuelo contiene numerosos yacimientos de minerales: oro, platino, plata, hierro, plomo, cinc, mercurio, cobre, azufre, uranio, bauxita, carbón y petróleo; es proverbial su riqueza en esmeraldas. Los ríos de la región andina pueden suministrar considerables cantidades de energía hidroeléctrica y las reservas de carbón están consideradas como las más importantes de América Latina.

Los recursos son vastos, pero relativamente poco desarrollados. La orientación de ese desarrollo, por lo demás, ha sido poco afortunada, ya que se basó fundamentalmente en la demanda externa y descuidó satisfacer las necesidades de la población. Es verdad que a partir de los años cuarenta se dio significativo impulso a la industrialización y se realizaron esfuerzos por modernizar y diversificar el conjunto de la agricultura, pero la economía depende aún en grado perjudicial de unos cuantos productos, entre los cuales descuella el café. Este representa por sí solo alrededor del 50% de las exportaciones totales del país, también dependientes en grado sumo de un solo cliente: Estados Unidos.

A esto se agrega que una parte importante de la producción manufacturera está al servicio de los grupos de elevado ingreso y que muchas de las industrias más dinámicas se hallan dominadas por capitales norteamericanos, con intereses que no suelen coincidir con los del país. Aunque existe una clase media urbana en constante crecimiento y cuyo poder adquisitivo constituye un aliciente para los fabricantes, la generalidad del pueblo colombiano vive en la pobreza, lo que da por resultado un mercado interno relativamente limitado.

Es, pues, una economía muy vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, lo que crea graves tensiones en la situación social y política del país, como repetidamente se ha venido observando.

La agudización de las contradicciones sociales y las crisis políticas en el país sudamericano, en efecto, se han producido con una frecuencia más que sospechosa a raíz de recesiones económicas en los países industrializados capitalistas, particularmente en Estados Unidos, aunque naturalmente no fue éste el único factor que las originó.

La Gran Depresión, que se inició en 1929, determinó el colapso de los precios del café, el petróleo y el plátano, que representaban en aquella época, respectivamente, el 69, 17 y 6 por ciento de las exportaciones totales colombianas. La repercusión política fue inmediata y los conservadores fueron desplazados del gobierno por los liberales. En 1948-49 se registró la primera contracción económica de la posguerra, suceso que precedió en poco la llegada al poder del dictador Laureano Gómez. Este fue derribado durante la recesión de 1952-53 por un golpe militar encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien a su vez sufrió la misma suerte durante la recesión de 1957-58, que causó el desplome de los precios del café. La actual es también época de crisis económica y, a las calamidades de la recesión, principalmente un elevado desempleo, se añaden en Colombia, como en otras naciones latinoamericanas, los desastrosos efectos de una seria inflación. Un hecho positivo, sin embargo, es que los precios de su principal producto de exportación se recuperaron parcialmente como consecuencia de la disminución de la cosecha brasileña de café en 1975.

Conservadores y liberales comparten la responsabilidad histórica de este modelo de desarrollo. Y si su gestión económica ha sido poco acertada, un calificativo mucho más severo merece su actividad en el campo de la política. Sus luchas por el poder, a lo largo de más de un siglo, arrastraron muchas veces a las masas a sangrientos choques, a pesar de que mayormente se dirimían intereses de grupos minoritarios que en poco concernían al bienestar del conjunto del pueblo. En general, los conservadores defendían una política favorable a los terratenientes feudales, las empresas mineras y los privilegios del clero en la sociedad, mientras que los liberales representaban a una naciente burguesía industrial y mercantil, anticlerical y federalista.

A primera vista podría llegarse a la conclusión de que los liberales representaban a las fuerzas más progresistas de aquella época, y en cierto modo así era, pero algunas de las medidas tomadas por ellos distaron de ser felices. En las reformas de 1850, por ejemplo, junto a las medidas de descentralización del gobierno, se puso fin a la propiedad comunitaria de las tierras en manos de los indios, lo que eliminó una de las principales defensas de éstos ante la voracidad de los especuladores y terratenientes.

Esto no fue lo peor. En los decenios subsiguientes se inició un período de luchas violentas, acompañadas de desórdenes de gran amplitud, entre liberales y conservadores. De 1860 a 1895 menudearon los conflictos que, en algunos casos, se asemejaron a una guerra civil. La culminación fue la Guerra de los Mil Días, sostenida de 1899 a 1903, en la que perecieron, según algunas estimaciones, más de 100 000 personas.

Los años de la década de 1930, con los liberales en el poder, se caracterizaron por medidas agrarias positivas, aunque de alcance limitado, así como por el comienzo de la industrialización a través del sistema de sustitución de importaciones. Este lapso de relativa paz se interrumpió en abril de 1948, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que provocó el famoso estallido de violencia conocido como el "bogotazo" y el subsiguiente estado de guerra civil, que duró más de diez años, y en la cual, además de cuantiosos daños económicos, perecieron cerca de 200 000 personas.

A fin de poner término al sangriento conflicto, en 1957 liberales y conservadores convinieron en una tregua y, con la Declaración de Sitges, acordaron compartir el poder presidencial alternativamente por períodos de cuatro años y mantener la igualdad política en todos los puestos de la administración. Este convenio se mantuvo íntegramente durante 16 años. A lo largo de ellos la industrialización progresó con altibajos, y se promulgó una ley de reforma agraria. Entre las principales dificultades económicas cabe mencionar un elevado desempleo y la inflación, aunque también hay que consignar que de 1966 a 1969 se registró un rápido crecimiento del producto nacional bruto.

En 1974 concluyó la vigencia del acuerdo liberal-conservador en sus aspectos principales, aunque se mantuvo la paridad en el gabinete. Elegido presidente el liberal Alfonso López Michelsen ese mismo año, su gobierno acentuó la evolución de la política económica hacia una más decidida independencia, ya iniciada con el ingreso en el Grupo Andino. Cabe señalar aquí su adhesión a la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB) y al Sistema Económico Latinoamericano (SELA), así como su reciente "colombianización" de bancos extranjeros y compañías de seguros. En el orden interno debe mencionarse la reforma tributaria.

Sin embargo, la paz lograda por el pacto de Sitges tuvo un alto precio político. Este consistió en la creciente apatía del electorado colombiano, que reaccionó en esta forma ante la falta de verdaderas opciones. En una primera etapa una gran masa de ciudadanos, constituida por amplios sectores urbanos, expresó su descontento votando en favor de la

Alianza Nacional Popular (ANAPO), encabezada por el general Rojas Pinilla —atraída por el ideario populista de ese partido—, y en las elecciones de 1970 la coalición liberal-conservadora estuvo a punto de perder. En una fase posterior, sin embargo, los grupos descontentos de estudiantes, trabajadores y campesinos han seguido métodos de lucha totalmente diferentes, como se dijo al principio de este artículo.

La apatía del electorado, en efecto, no es un hecho nuevo en Colombia, si bien nunca había alcanzado la magnitud que tuvo en los comicios de abril último. En las elecciones presidenciales de 1962 no votó más que la mitad de los colombianos con derecho a hacerlo, y en las legislativas de 1964 únicamente sufragó el 40 por ciento.

Este fenómeno debilita la legitimidad del gobierno y puede acrecentar el peligro de golpe militar. La tentación para los militares de tomar el poder es mayor, además, a causa de la agudización de la lucha de clases provocada por los desaciertos políticos y económicos.

Dos caminos han seguido últimamente los militares en países latinoamericanos para alcanzar ese propósito: la intervención brutal, con la abolición de todas o casi todas las instituciones democráticas del Estado y organizaciones del pueblo, y la imposición subrepticia de sus concepciones a través de los órganos estatales, en algún caso con el asentamiento de los representantes electos.

En el primero es una ruptura completa del orden institucional y siempre un despotismo. En el segundo se viola el principio de que los representantes electos, y no otros, desempeñen sus funciones y cumplan con el mandato fundamental de defender y, en la medida de lo posible, ampliar las libertades y el bienestar de los gobernados. Aceptar la imposición es aceptar el despotismo.

Este artículo comienza con dos afirmaciones: una en contra de la esclavitud; la segunda en favor del régimen civil. La primera va unida a la segunda. No debe existir la menor duda sobre esto.

Ante la llegada al poder de los militares en otros países latinoamericanos, dos también suelen ser, con matices, las posiciones que se adoptan: 1) El rechazo. En América Latina, al menos, sobra capacidad civil para gobernar. 2) La aprobación o desaprobación de los militares, según sus ideas sean afines o no.

La única posición consistente es la primera. Evidentemente hay grandes diferencias entre régimen militar y régimen civil. Evidentemente difieren en procedimientos y fines. Evidentemente sus frutos los distinguen. Evidentemente ambos son despotismos. Estos no dejan de serlo porque se ejerzan con una orientación politicosocial u otra. Los latinoamericanos no sufren de exceso de libertades, sino de falta de ellas. Los que se quejan de la libertad formal, de la libertad adjetivada, no deben olvidarlo jamás.

En estas circunstancias el deber de los creyentes colombianos es claro: unirse a todos los partidarios de la democracia para preservar un régimen de libertad que permita los cambios de estructuras necesarios y la creación de una sociedad más justa. □

De la p. 549

reciben. A menudo mueren víctimas de las fiebres y de los peligros de la selva cuando intentan huir, puesto que muy difícilmente logran reunir el elevado costo del viaje de regreso a sus sitios de origen. Se utilizan 20 aviones para proveer a los *garimpeiros* diseminados en un radio de 150 a 800 km en torno a Itaituba. Los principales centros de extracción se encuentran a lo largo de la ribera del río Tapajos y de sus afluentes Jamanxim, Crepori y Cururu. Ninguno es accesible por vía terrestre, a algunos se llega por río en viaje que dura varios días, pero a 22 de ellos sólo se puede llegar por el aire.

En cambio, en la explotación de bauxita de Trombetas, cerca de la desembocadura del Amazonas, se utiliza la tecnología avanzada de las empresas transnacionales que participan con el 49% del capital. The Aluminium Co. de Canadá, tiene el 19% de las acciones y el 30% restante se divide entre empresas inglesas, españolas, noruegas y holandesas. Se prevé que en Trombetas se producirán 3.7 millones de ton de bauxita en 1979. Después, en pocos años, la producción ascenderá a 9 millones de ton anuales (Australia, la mayor exportadora de bauxita en la actualidad, vendió al exterior 8 millones de ton en 1975).

Trombetas es tan sólo uno de varios depósitos cuya explotación está en marcha. Como es de fácil acceso, el costo de la fase preparatoria de la explotación se ha estimado en 300 millones de dólares y se prevé que serán necesarios 900 millones más para construir instalaciones ferroviarias, de energía y portuarias.

Un consorcio integrado por cinco empresas japonesas, el Light Metals Smelters Association, inició negociaciones para construir una planta con un costo de 1 600 millones de dólares cerca de la ciudad amazónica de Belem a fin de convertir la bauxita en 320 000 ton de lingotes de aluminio al año. Japón tendrá el 49% de la participación y Brasil controlará el 51%. Empero, el proyecto se ha paralizado a causa de que el gobierno brasileño exige el financiamiento, por parte de Japón, de las instalaciones de energía hidroeléctrica, cuyo costo asciende a 400 millones de dólares, para abastecer las necesidades de la proyectada planta. En la actualidad Brasil importa 150 000 ton de aluminio al año, pero cabe prever que se convertirá en gran exportador del producto una vez que

disponga de energía hidroeléctrica barata.

Destaca también el complejo minero del estado de Goiás, llamado Niquelandia, impulsado por un grupo brasileño-francés. Se calcula que ahí se producirán 10 000 ton de níquel en 1977. En la actualidad Brasil importa 2 000 ton al año.

Otro índice de la importancia de Brasil como proveedor de productos básicos para un mundo industrializado, hambriento de materias primas, es el de que sus exportaciones de mineral de hierro crecieron 58%, tanto en 1974 como en 1975. Las riquezas minerales de Brasil son muy cuantiosas, como es inmensa la potencialidad económica de la Amazonia. Conforme al llamado modelo brasileño,⁴ se propicia por todos los medios la participación de los inversionistas, banqueros y empresarios extranjeros para explotar esos recursos. Por su parte, estos últimos aceptan más que gustosamente las señales amistosas de Brasil. Dicha política, a juicio del gobierno castrense, permitirá "inundar de civilización" el interior del país y preservar la importancia estratégica de la Amazonia. □

URUGUAY

La crisis que no puede enmascarse

El discurso del general Vadora, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Uruguay, pronunciado el 18 del presente, en ocasión de celebrarse el "Día del Ejército", puede autorizar la afirmación de que —no obstante lo establecido en la muy maltratada Constitución Nacional— no se celebrarán, en el próximo mes de noviembre, las elecciones generales.

Cierto es que el día anterior el matutino *El Día*, de Montevideo, intentaba el mantenimiento de la limitada y sigilosa línea aperturista. Su titular de primera página registraba, con inocultable adhesión, el hecho de la concurrencia masiva de jóvenes a las oficinas de la Corte Electoral para obtener la credencial que los habilitara para ejercer el derecho de voto en las próximas elecciones. Su página editorial repro-

ducía, a la vez, el texto inserto en el diario reaccionario y pro oficialista *La Mañana*, que postula, sin cortapisas, la vigencia histórica de los partidos tradicionales (Partido Nacional y Partido Colorado) más allá de todos los intentos para suspender o eliminar sus actividades.

El mismo obstinado fervor histórico y tradicionalista se mostraba en las páginas del diario *El País*, principal vocero del régimen cívico-militar. Sin embargo, las palabras del general Vadora constituyen un rotundo mentís a las aspiraciones electorales sustentadas por representantes de ambos partidos. También son un índice del apoyo militar —¿mayoritario? , ¿unánime? — a las tesis continuistas y definitivamente cancelatorias de toda participación de los políticos en la vida nacional, que formulara el presidente Juan María Bordaberry en su memorándum del 9 de diciembre del año pasado.

Los hechos, los duros hechos, se precipitan y van más allá de las palabras. Tanto como para que se pueda pensar que, en la crítica situación uruguaya, no hay cosa juzgada.

A la magnitud tremenda de la represión, a la existencia de más de 6 000 presos políticos (en una población cuyo total se estima en 2.5 millones de habitantes), se suman, súbitamente, el secuestro del doctor Manuel Liberoff —dirigente del Sindicato Médico de Uruguay— y el asesinato de los ex-legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, secuestro y asesinato de asilados políticos en Buenos Aires.

Estos hechos, y especialmente la muerte de Gutiérrez Ruiz, han sido imputados por el líder del Partido Nacional, Ferreira Aldunate, a fuerzas reaccionarias del régimen uruguayo.

Por su parte, los medios internacionales de prensa han señalado el carácter de "sinistra advertencia" que tienen esos crímenes. En efecto, según las mencionadas declaraciones del señor Ferreira Aldunate (*Excelsior*, México, 28 de mayo de 1976), el ex-presidente de la Cámara de Diputados Gutiérrez Ruiz habría recibido, en las últimas semanas, la visita de delegados políticos y militares que, alarmados por la espiral descendente que caracteriza al proceso uruguayo, intentan una apertura democrática, sobre la base del respeto irrestricto de los

4. Véanse "Brasil: ¿fin del milagro?" y "Brasil: aspectos de la evolución económica reciente", en *Comercio Exterior*, México, diciembre de 1974, pp. 1275-1276, y noviembre de 1975, pp. 1238-1241, respectivamente.

derechos humanos y de la celebración de elecciones generales en noviembre. Al parecer, en medio de trágicas "advertencias" existen fuerzas internas dispuestas a no permitir que sean avasalladas las seculares libertades conquistadas por el pueblo uruguayo.

En opinión de los observadores, así se confirma la aseveración hecha a mediados de 1975 acerca de las fuerzas vivas y actuantes, sindicales y políticas, capaces de influir en las amplias masas de trabajadores, que en condiciones de una favorable coyuntura política pueden convertirse en factor decisivo del futuro político de la patria de Artigas.¹

Estas mismas fuerzas fueron las que en noviembre de 1971 apoyaron la candidatura del general Seregni a la primera magistratura del país; las que desataron en julio de 1973 la huelga general frente al golpe de Estado, sin que pueda omitirse, además, la coincidencia antidictatorial entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.

Por otro lado, los medios informativos han mencionado reiteradamente la posición anticontinuitista del ministro de Economía, Alejandro Vegh Villegas, que se habría puesto de manifiesto, con el mayor vigor, en su respuesta a la opción planteada por Bordaberry en el mencionado memorándum.

El ministro Vegh, empeñado en "liberalizar" la economía uruguaya, advierte, ahora, las consecuencias que para su futura trayectoria han de tener el clima de represión y violencia y la constante violación de los derechos humanos. El costo humano y social de su modelo económico —en nada diferente al que quiere imponer en Chile la Junta Militar— no puede menos que comprometer la imagen, fríamente técnica, de su autor.

La prensa internacional, a su vez, reitera en los últimos meses la conocida aseveración del apoyo a una solución de apertura —limitada, encogida, salvadora de las apariencias— que empuja la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

En el sector militar las tendencias y divisiones afloran sin cesar. Según los

analistas, van desde la más reaccionaria que encabeza el general Cristi, jefe de la Zona Militar más importante, y que apoyaría con decisión la permanencia de Bordaberry en el gobierno, hasta la jefatura por los generales Eduardo y Rodolfo Zubía, también jefes de zonas militares, que no extenderían un aval, en blanco y sin condiciones, a la perpetuación de Bordaberry, una vez vencido el plazo constitucional en marzo de 1977. A lo anterior cabe añadir que el general Alvarez, desde la jefatura de la Zona Militar del Este del país, ha mantenido actitudes disidentes en aspectos relevantes de la política económica.

Pueden reseñarse aun otros rasgos del contradictorio panorama uruguayo. Han existido y existen enfrentamientos con la Iglesia, que van desde la conocida censura de una Pastoral que asumía la tesis de la amnistía, hasta las detenciones de sacerdotes.

Los arrestos y prisiones de oficiales, estimados en más de cien, indican la existencia de resquebrajamiento y erosiones en la institución militar, que sobrepasan, como parece obvio, las divisiones internas anotadas.

A juicio de los expertos, los hechos enumerados, las circunstancias apuntadas, las tendencias que afloran, hacen imposible enmascarar la situación de extrema crisis que conmueve toda la estructura de Uruguay. En muchos casos, todo eso puede agotarse sin provocar una transformación radical del proceso iniciado en junio de 1973. Pero hechos, circunstancias y tendencias pueden verse en otro contexto. En el de la agregación de factores más permanentes, que por su vinculación histórica y por el peso de fuerzas —sindicales y políticas— con una arraigada y experimentada trayectoria democrática, decidan un desenlace que satisfaga las aspiraciones libertarias del pueblo uruguayo.

Como se dijo en nota anterior de esta revista: "La evolución política del país está ligada a los resultados concretos de la política económica del Gobierno uruguayo y a sus perspectivas de corto y mediano plazo".

El 26 de abril último, el ministro de Economía Vegh Villegas, realizó, en la Cámara de Comercio, un análisis de los lineamientos de la política económica,

de la situación y de las perspectivas de la economía nacional.

Un resumen de su intervención, las reflexiones que la misma sugiere al economista Faroppa, desde su columna semanal del diario *El Día*, y algunas acotaciones complementarias, son elementos de juicio ineludibles para valorar la conexión político-económica del Uruguay de hoy.

En su exposición el ministro Vegh abarcó el período enero 1975-abril 1976. Al proceder al examen de los lineamientos generales de su política en el lapso señalado, destacó principalmente aquellas medidas que operaron, en continuidad, a lo largo del primer trimestre de 1975: el mejoramiento de los precios relativos por eliminación de subsidios al consumo y a la afluencia del ahorro interno por obra de la liberalización del mercado de cambios y la eliminación del impuesto a la renta y a los dividendos.

A este primer tramo sucede un segundo período (abril-septiembre de 1975) en el cual debió hacerse una "pausa" en la aplicación del programa estabilizador, debido, fundamentalmente, a la persistencia del ritmo inflacionario. Se suspendieron, entonces, los ajustes de salarios, del tipo de cambio y de precios. En las postrimerías de septiembre se pudo reanudar el tratamiento gradualista y se decidió, en consecuencia, el aumento de precios y salarios, empléandose de nuevo el procedimiento de las minidevaluaciones.

El bajo nivel de la inflación en el primer trimestre de 1976 (5%) sería efecto de aquella "pausa" de abril-septiembre de 1975.

En el rubro de la finanzas públicas reconoció que el déficit alcanzó al 28% de los egresos y al 4.5% del producto interno bruto. Descartó el Ministro que se hubiera producido un aumento de los gastos reales durante 1975 y atribuyó el déficit a la contracción de ingresos y, especialmente, a la de los provenientes de los gravámenes sobre exportaciones, que fueron eliminados en aplicación de la política ministerial. Agregó que, en su mayor parte, el déficit fue financiado por la venta de Bonos del Tesoro. Aseguró luego que en el primer trimestre de 1976 se había reducido el déficit al 20%, que significa un 3% del producto interno bruto.

En lo que respecta al sector externo, insistió en que, al primer trimestre de

1. Véase "Uruguay: los generales quieren y no pueden; el Presidente tampoco", en *Comercio Exterior*, México, julio de 1975, pp. 759-761.

1976, se había alcanzado una situación de equilibrio de la balanza comercial, un mejoramiento del tipo de cambio real, favorable a la corriente exportadora, y una desahogada situación de pagos, índice del fortalecimiento del país en el campo financiero internacional. Afirmó que durante 1975 se importaron bienes de capital por un monto de 100 millones de dólares y que en el primer trimestre del año en curso la cifra correspondiente fue de 30 millones de dólares. La inversión bruta fija fue de 11.5% del producto de 1975 y se prevé para 1976 alcanzar el 15% del producto.

En conclusión, afirmó que son mejores las perspectivas de futuro y reiteró su convicción de haberse acertado con el rumbo en la conducción económica del país.

Hasta aquí el escueto y optimista balance ministerial.

Vale la pena transcribir, ahora, las reflexiones que el mismo sugiere al economista Faroppa, desde su columna semanal en *El Día* (3 de mayo de 1976).

“Como economista de tendencia monetarista —señala el autor— el Ministro sólo se refirió a variables monetarias (medios de pago, ingresos y egresos fiscales, evolución de la reserva de divisas). Nada analizó referente a las vicisitudes de las distintas producciones, al crecimiento o decrecimiento de la desocupación, a la evolución de los ingresos y consumos, etcétera.”

Sobre el déficit fiscal y su origen en la contracción de los ingresos, las precisiones del economista Faroppa son las siguientes:

- La estructura impositiva de Uruguay se caracterizaba por integrarse, en 85 a 90 por ciento, por los impuestos al consumo, y en 10 a 15 por ciento, por los impuestos a las rentas, a las ganancias, a las fortunas y a los patrimonios.

- Las derogaciones realizadas (impuestos a la renta, a los dividendos, a las herencias, etc.) han aumentado la participación de los impuestos al consumo, al punto que hoy en día la imposición está basada, casi exclusivamente, sobre los consumos de la población.

- Los consumos dependen de los ingresos. Y el nivel de éstos, por habitan-

te, está más de 4% por debajo del correspondiente a 1970. “Los ingresos decrecientes tienden a generar consumos descendentes; los impuestos crecientes sobre los mismos los recortan aún más; finalmente, los alquileres y otros gastos, en ascenso, los presionan más fuertemente a la baja.”

El hecho de haberse recurrido, mayoritariamente, al producto de la venta de Bonos del Tesoro para financiar el déficit fiscal motiva el siguiente comentario:

- “Su utilización [para financiar el déficit] impidió que se recurriese al crédito del Banco Central y se acentuase la presión inflacionaria. Cabe preguntarse, sin embargo, sobre la conveniencia de seguir manteniendo un déficit que se enjuga [financia] con moneda extranjera. Estamos consumiendo divisas para gastos que pueden ser improductivos; estamos corriendo el riesgo de enfrentar el pago de amortizaciones e intereses sin haber creado las fuentes de producción que generen las divisas necesarias para ello; estamos arriesgando trasladar a las generaciones futuras el pago de consumos improductivos actuales.”

Las perspectivas para 1976 que, según la exposición ministerial, se resumen en la situación desahogada en materia de pagos internacionales y en el abatimiento de la inflación, merecen estas reflexiones:

- “Uruguay es una economía basada en la empresa privada; consecuentemente se moviliza en función de las expectativas de sus empresarios, especialmente en los últimos años. Las expectativas del sector rural —endeudado y con rentabilidad insuficiente— no son adecuadas para sustentar un crecimiento sostenido; lo mismo pasa en el sector industrial donde se teme que las modificaciones, a estudio, de los impuestos aduaneros acrezcan el costo de la materia prima en 150%, se encarezca el dólar operativo, se disminuyan o eliminen los reintegros a las exportaciones; algo similar ocurre en el comercio, que experimenta los efectos de las situaciones anteriores y, además, las repercusiones cambiarias de la política argentina.”

“Esas incertidumbres, en mayor o menor grado, explican la distancia, de aproximadamente un 25%, entre las cotizaciones de nuestra moneda en los mercados cambiarios comercial y financiero.”

Y concluye:

- “Una nación con equilibrio externo, crecimiento interno e inflación en descenso, tendría expectativas distintas a las que caracterizan, todavía, a nuestro país.”

Las anteriores apreciaciones de Faroppa —fundador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, ex-director de Planeamiento y Presupuesto durante la Presidencia del general Gestido— y en especial sus referencias a los rubros omitidos en la exposición del Ministro de Economía, pueden complementarse con las siguientes acotaciones:

- En el año 1975 el poder de compra del salario experimentó una caída de alrededor del 8 por ciento.

- Dos de los componentes más rígidos del gasto familiar experimentaron una elevación desmesurada (alquileres y tarifas de servicios públicos).

- La caída del ingreso de los principales sectores y del salario real determinaron una fuerte contracción en las industrias de la alimentación y de la indumentaria, en las de aparatos electrodomésticos y en la de automotores.

- El sector ganadero alcanza un pasivo del 40% de los activos en semovientes, según la estimación realizada por la Federación Rural.

- No se conocen cifras oficiales sobre desocupación. La emigración de la mano de obra —con niveles muy altos— es un índice relevante de la situación laboral.

- En la industria de la construcción, que tradicionalmente operó como importante mercado de trabajo, no existen ya condiciones favorables: el Plan de Viviendas no financiará obras en 1976 y la construcción de balnearios se ha detenido como consecuencia de la situación económica y política en Argentina.

A la luz de todos estos elementos y de su inevitable conexión parecen justificadas las opiniones que insisten en la inocultable precariedad de la situación uruguaya. Como lo son, también, aquellas que estiman el crecimiento durante 1975 en un módico 1%, sin dejarse impresionar por el clamoroso 4.1% que, para el mismo año, estampa el Informe de la Organización de Estados Americanos. □